

Cuernavaca, Morelos, resolución aprobada por los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, en sesión de Pleno celebrada el veintidós de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS para resolver los autos del expediente iniciado con motivo de la presentación del recurso de inconformidad promovido por la recurrente citada al rubro, ante la falta de respuesta a la solicitud de información presentada a la Fiscalía General del Estado de Morelos, y:

RESULTANDO

I. El catorce de diciembre dos mil quince, ***** , presentó vía escrita solicitud de información pública a la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante la cual requirió lo siguiente:

“... ”

¿Qué medidas tiene para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio?

¿La efectividad en el cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al fortalecimiento de la Fiscalía General, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos?

¿La Unidad Especializada encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere la solicitud de AVGM, cómo está funcionando para elaborar los expedientes en la identificación de los casos?.” (sic)

Medio de acceso a la Información: Copia simple

II. El dos de febrero del año dos mil dieciséis, ***** , promovió recurso de inconformidad, vía escrita, ante la falta de respuesta a la solicitud de información presentada a la Fiscalía General del Estado de Morelos, quedando registrado en este Instituto ese mismo día, bajo el de folio de control IMIPE/000402/2016-I, precisando como motivo de inconformidad el siguiente:

“...La información solicitada corresponde a las acciones que las instancias mencionadas están realizando respecto a la ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MORELOS, DECRETADA POR LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES (CONAVIM), EL 10 DE AGOSTO DE 2015.

Hasta la fecha no hemos recibido la información solicitada a estas dependencias” (sic)

III. Mediante acuerdo de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el Comisionado Ponente ante la Directora General Jurídica de este instituto, admitió a trámite el recurso de inconformidad planteado, radicándolo bajo el número de expediente RI/032/2016-III, corriéndole traslado al Titular de la Unidad de Información Pública de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días hábiles, posteriores a su notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera o en su caso, remitiera la información requerida; acuerdo que fue debida y legalmente notificado el veintitrés próximo, tal y como consta en autos del expediente que nos ocupa.

IV. En cumplimiento al auto admisorio descrito con anterioridad, a través del oficio número FGE.DGSIC.1410.16-02, del uno de marzo de dos mil dieciséis, recibido en este Instituto ese mismo día, bajo el folio de control IMIPE/000778/2016-III, el licenciado Víctor Manuel Alanís Morales, Titular de la Unidad de Información Pública de la Fiscalía General del Estado de Morelos, remitió similar el cual será analizado en la parte considerativa de la presente determinación.

Descritos los términos que motivaron la interposición del presente recurso de inconformidad, en el siguiente capítulo se estudiarán los mismos, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. El Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es competente para conocer del presente asunto de conformidad en lo dispuesto por los artículos 2 y 23-A de la Constitución Política

**Rufino Tamayo esquina Morelos,
No. 13 Col. Acapatzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México**

**www.imipe.org.mx
Tel. 01(777) 362 25 30**



ENTIDAD PÚBLICA: Fiscalía General del Estado de Morelos.
RECURRENTE: *****+
EXPEDIENTE: RI/032/2016-III
COMISIONADO PONENTE: Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez.

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 96, numerales 1 y 2 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; así como por los artículos 1, 82, 90 y 104 del Reglamento de dicha Ley.

SEGUNDO. La substanciación del presente procedimiento se rige conforme a lo dispuesto por los artículos 105, 108, 111, 112, 113, 116 al 118 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 106 y 107 del Reglamento de dicha Ley.

TERCERO. La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, es de orden público y es el instrumento jurídico mediante el cual se tutela el derecho de acceso a la información pública de todas las personas; el derecho a la protección de los datos de carácter personal que estén en posesión de los sujetos obligados previstos en este ordenamiento; regula la formulación, producción, procesamiento, administración y difusión de las estadísticas, sondeos y encuestas que se requieran para la toma de decisiones y el cumplimiento de las funciones legales inherentes a las entidades públicas.

Dicha Ley, reconoce como bien público la información en posesión de los sujetos obligados, cuya titularidad radica en la sociedad y debe ser de observancia obligatoria para todas las entidades públicas a que hace referencia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para las instituciones, organismos y funcionarios de los poderes públicos estatales y municipales del Estado; así como para todas las personas que reciban y ejerzan recursos públicos del Estado, y en relación con la aplicación de fondos integrados por financiamiento, aportaciones y subvenciones privadas nacionales e internacionales destinadas a financiar actividades relacionadas con la función pública; además para todas aquellas personas que utilicen bienes, servicios y patrimonio públicos, y actúen en auxilio de las entidades públicas. Lo anterior, se establece en los artículos 2, 3 y 4 de la ley de la materia.

Ahora bien, para efecto de brindar oportuno cumplimiento a la disposición legal referida, el numeral 27 del ordinal sexto de la Ley en cita, señala que son sujetos obligados *"Todas las entidades públicas a que se refiere la fracción IX del presente artículo, los servidores públicos a ellas adscritos; así como todas las personas físicas o morales que reciban y ejerzan gasto público y actúen en auxilio de las entidades públicas, y todas las demás a que se refiere esta ley."*; lo anterior, nos constriñe a observar lo dispuesto por el numeral 9 de dicho precepto legal, toda vez que éste enuncia las instituciones gubernamentales obligadas al cumplimiento de la normatividad que en materia de transparencia se impone. Al respecto, cobra relevancia citar que tal disposición contempla como entidades públicas a: *9.- ... Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal, la Defensoría Pública."*

Así pues, en términos del artículo 9 y cuarto párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, además del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, queda claro que la Fiscalía en cuestión es un sujeto obligado por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. Los ordenamientos citados se enuncian a continuación para mayor claridad:

Artículo 9.- El Gobernador del Estado es el titular de la administración pública del Estado, quien ejercerá sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 11.- El Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes secretarías:...

La Fiscalía General del Estado de Morelos, se regirá por las disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás leyes aplicables

Artículo 3. La Fiscalía General, es una Institución perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado, dotada de autonomía de gestión, técnica, de ejercicio y de aplicación del gasto público que le asigne el Congreso del Estado"

Ahora bien, los artículos 68 y 71 de la Ley de la materia, señalan que los titulares de los sujetos obligados establecerán Titulares de Unidades de Información Pública (*UDIP*), quienes serán las responsables de atender y gestionar las solicitudes de acceso a la información. De tal suerte que, ante la respuesta que recaiga a la solicitud de información, la particular puede interponer recurso de inconformidad por no estar conforme con la misma.

**Rufino Tamayo esquina Morelos,
No. 13 Col. Acapatzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México**

**www.imipe.org.mx
Tel. 01(777) 362 25 30**



ENTIDAD PÚBLICA: Fiscalía General del Estado de Morelos.
RECURRENTE: *****+
EXPEDIENTE: RI/032/2016-III
COMISIONADO PONENTE: Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez.

CUARTO. Una vez identificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos como destinatario de las disposiciones que imponen a los entes públicos la obligación de garantizar el acceso a la información de todas las personas; se advierte la procedencia del presente medio de inconformidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, en relación con el diverso 82 del Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, ambos ordenamientos del Estado de Morelos; cuyo contenido refiere que el recurso de inconformidad será procedente en los siguientes supuestos: 1. Cuando se niegue el acceso a la información 2. Cuando el particular considere que la información entregada es incompleta, o no corresponde con la requerida en su solicitud; y, 3. No este de acuerdo con el tiempo, costo o modalidad de la entrega. En el particular, se actualizó el primero de los supuestos, toda vez que el sujeto aquí obligado, no otorgó respuesta a la solicitud de información presentada por *****.

Ante ello, es importante puntualizar que el artículo 88 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y el artículo 83 de su Reglamento, establecen lo siguiente:

"Artículo 88.- Si transcurridos diez días hábiles de presentada la solicitud de información, la unidad de información pública no respondiere al interesado, aplicará el principio de positiva ficta y la autoridad estará obligada a entregar la información de manera gratuita en un plazo perentorio de 10 días naturales.

Artículo 83.- Cuando el recurso de inconformidad se promueva ante la falta de repuesta o positiva ficta, el plazo de treinta días hábiles que contempla el artículo 105 de la Ley, para interponer el recurso de inconformidad empezará a correr una vez que hayan fenecido los diez días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud y la entidad pública o partido político no haya respondido."

Esta hipótesis invocada en el particular ocurrió, pues ***** presentó, vía escrita presentó solicitud de información pública a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el catorce de diciembre de dos mil quince, de esta manera el término que la entidad pública tuvo para responder a la solicitud de referencia, comenzó a computarse a partir del día quince próximo siguiente y feneció el día trece de enero de dos mil dieciséis, sin que la Unidad de Información Pública de la entidad pública referida al rubro haya emitido respuesta alguna, dando con ello lugar a la aplicación de la positiva ficta, lo cual motivó a que este Instituto admitiera a trámite el recurso de inconformidad presentado, ante la falta de respuesta a la solicitud de información por parte del sujeto aquí obligado; criterio con el que este Pleno coincide y determina que existe causal para que la particular solicite la tutela de su derecho fundamental previsto en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta autoridad.

En esa línea de razonamiento se citan los artículos 3 y 4 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, que a la letra refieren lo siguiente:

"Artículo 3. La ley reconoce que toda la información en posesión de las entidades estatales y municipales es un bien público cuya titularidad radica en la sociedad.

Artículo 4. La ley es de observancia obligatoria para todas las entidades públicas a que hace referencia la constitución Política del Estado de Morelos, para las Instituciones, organismos y funcionarios de los poderes públicos estatales y municipales del Estado; así como para todas las personas que reciban y ejerzan recursos públicos del Estado, y en relación con la aplicación de fondos integrados por financiamiento, aportaciones y subvenciones privadas nacionales e internacionales destinadas a financiar actividades relacionadas con la función pública; además para todas aquellas personas que utilicen bienes, servicios y patrimonio públicos, y actúen en auxilio de las entidades públicas"

Así, queda de manifiesto que dentro de un Estado Constitucional los representantes están al servicio de la sociedad, por lo tanto los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley.

Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª, LXXXVIII/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, agosto 2010, página 483, con el siguiente contenido:

*"Registró No. 164032
Localización:*

**Rufino Tamayo esquina Morelos,
No. 13 Col. Acapatzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México**

**www.imipe.org.mx
Tel. 01(777) 362 25 30**



ENTIDAD PÚBLICA: Fiscalía General del Estado de Morelos.
RECURRENTE: *****+
EXPEDIENTE: RI/032/2016-III
COMISIONADO PONENTE: Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez.

INFORMACION PUBLICA, ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO.

Dentro de un Estado constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no está al servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, Información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de estos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6º, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.”

QUINTO. El derecho de acceso¹ a la información pública, se traduce en la prerrogativa de las personas para acceder a la información en posesión de los sujetos obligados, considerada como un bien público; no obstante, quedará restringido cuando se actualice algunas de las figuras de excepción –*información reservada, información confidencial*- al afectarse los derechos de terceros por su difusión.

De ahí que resulta menester analizar la naturaleza de la información solicitada por *****+, a fin de determinar si su derecho de acceso se encuentra restringido, por alguna de las figuras referidas en el párrafo que antecede.

Por principio, es importante destacar que el imperativo de tutelar el derecho de acceso a la información y la consecuente obligación de las entidades públicas de permitir el acceso a la información generada en ejercicio de sus funciones, parte desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el Artículo 6º, apartado “A”. En este sentido, por mandato constitucional la transparencia gubernamental constituye un eje fundamental en el desarrollo de la función pública, cuya importancia radica en la garantía de un derecho social y coadyuva en la formación de una sociedad informada, crítica y participativa.

Ahora bien, ante ello es importante precisar que la información materia del presente recurso de inconformidad, en términos del artículo 6, numeral 14, tiene el carácter de pública señalando al respecto lo siguientes: *“Información contenida en los documentos que se encuentren en posesión de las entidades y sujetos obligados, así como la que derive de las estadísticas, sondeos y encuestas realizados para la toma de decisiones y cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las autoridades correspondientes.”* En esa línea de razonamiento, es obligación de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de entregar la información que se les requiere, siempre y cuando éstos formulen, produzcan, procesen administren, archiven y resguarden en el ejercicio de la función pública, pues no debe olvidarse que una de las obligaciones que impone dicho ordenamiento legal -artículo 23 de la ley de la materia-, radica precisamente, que todo servidor público en el ejercicio de su función debe someterse al principio de máxima publicidad; por lo que de cumplirse con los extremos que al respecto señala la ley de la materia, es indudable que subsiste la obligación de la entidad pública de proporcionar la información solicitada por el particular. En ese sentido, al tratarse de información pública no existe impedimento legal alguno para que la entidad pública entregue o proporcione la información solicitada por la particular, puesto que dicha obligación deviene de un mandato constitucional que asiste a los gobernados para garantizar que estos sean enterados y que puedan acceder a toda aquella información que le sea de interés y utilidad.

Aunado a lo anterior, el artículo 3 de la ley de la materia determina que *“toda la información en posesión de las entidades estatales y municipales es un bien público cuya titularidad radica en la sociedad.”*, de tal suerte, que los servidores públicos estatales y municipales que generan, produzcan, procesen, administren y resguarden la información se encuentran legalmente constreñidos a ponerla a disposición de toda persona que la solicite².

¹ Jurisprudencia P.J.J. 54/2008, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Oficial, novena época, tomo XXVII, junio de 2008, página 743. *“ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. [...]”*

² Artículo 9.- Toda la información en posesión de los sujetos obligados se considera como un bien público que debe estar a disposición de cualquier persona, salvo aquella que por la afectación de los derechos de terceros y excepciones previstas en la presente ley, deba resguardarse por su carácter reservado o confidencial.



ENTIDAD PÚBLICA: Fiscalía General del Estado de Morelos.
RECURRENTE: *****+
EXPEDIENTE: RI/032/2016-III
COMISIONADO PONENTE: Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez.

En las condiciones apuntadas, los artículos 19 y 23 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y 8 de su Reglamento, estatuyen el principio de máxima publicidad, el cual, se traduce en la obligación de los entes públicos de exponer la información que poseen al escrutinio público, de forma simple, rápida y gratuita toda vez que evidencia el manejo, uso y aplicación que la autoridad realice del recurso público, es pues, este principio la esencia misma del Artículo 6º Constitucional.

Por lo tanto, el principio de máxima publicidad, implica un flujo abierto y constante de información hacia las personas, no es solo una obligación de permitir, sino que se refiere a una acción de hacer, abrir los documentos generados en el ejercicio de una función pública al escrutinio social y ponderar el conocimiento de las mayorías sobre el interés de unos cuantos, siempre y cuando no se encuentre legalmente justificada la clasificación de la información. Para robustecer lo anterior se transcribe a continuación el contenido del artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a letra refiere lo siguiente:

“Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.”

En mérito de ello, toda vez que no existe causa alguna que justifique la falta de entrega de la información por tratarse de información con carácter de pública, como queda puntualmente acreditado, este Órgano Colegiado determina que subsiste la obligación de la entidad pública de proporcionar la información requerida por ***** , a fin de garantizarle el derecho fundamental de acceso a la información, sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo contenido y datos de identificación son los siguientes:

*“Novena Época
Registro: 170998 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa Tomo: XXVI, Octubre de 2007
Página: 3345 Tesis: I.8o.A.131 A*

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración conjunta adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasificarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la información es universal.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 2 Rodríguez Fonseca, Julio César. Artículo “El Principio de Máxima Publicidad y Disponibilidad de la información pública, significados principales”. En Revista “ex lege electrónica”. Edición trimestral publicada electrónicamente por la Facultad de Derecho de la Universidad De La Salle Bajío.

*Amparo en revisión 133/2007. Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte Gómez.”*

Artículo 24.- La información es un bien público cuya titularidad radica en la sociedad. Todos los servidores públicos estatales y municipales que participen en la formulación, producción, procesamiento, administración, archivo y resguardo de información pública, deberán sujetarse a este precepto.”

**Rufino Tamayo esquina Morelos,
No. 13 Col. Acapatzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México**

**www.imipe.org.mx
Tel. 01(777) 362 25 30**



ENTIDAD PÚBLICA: Fiscalía General del Estado de Morelos.
 RECURRENTE: *****+
 EXPEDIENTE: RI/032/2016-III
 COMISIONADO PONENTE: Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez.

SEXTO. Si bien es cierto como fue analizado en el considerando tercero, la falta de respuesta dentro del término legal concedido a la solicitud de información de interés de la accionante actualizó en su favor el principio de positiva ficta, resulta necesario en este considerando avocarnos al análisis, ponderación y en su caso validación de los fundamentos, elementos y motivaciones recabadas durante la tramitación del presente asunto, a fin de determinar el sentido del presente fallo, es decir, antes de analizar la conducta desplegada por el ente público en un primer término, se centrará el proceso analítico a determinar si las documentales remitidas por la Fiscalía General del Estado de Morelos, garantiza el derecho de acceso a la información de *****.

Así tenemos que la peticionaria, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, presentó solicitud de acceso a la información a la Fiscalía General del Estado de Morelos, sin que esta entidad pública le proporcionara respuesta alguna dentro del término legal concedido. Ante ello, la ahora recurrente interpuso el recurso de inconformidad que se falla, argumentando la falta de respuesta a la solicitud de referencia; posteriormente verificados los requisitos de procedibilidad, se admitió a trámite mediante acuerdo de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis y se corrió traslado al Titular de la Unidad de Información Pública del sujeto obligado aquí aludido, para que se manifestara al respecto.

En cumplimiento al auto admisorio descrito con anterioridad, a través del oficio número FGE.DGSIC.1410.16-02, del primero de marzo del año actual, recibido en este Instituto ese mismo día, bajo el folio de control IMIPE/000778/2016-III, el licenciado Víctor Manuel Alanís Morales, Titular de la Unidad de Información Pública de la Fiscalía General del Estado de Morelos, remitió similar sin número de esa misma fecha, signado por la Maestra en Derecho Fabiola Jazmín García Betanzos, Coordinadora de la Unidad de Atención de Mujeres Víctimas del Delito, del sujeto aquí obligado mediante el cual otorgó respuesta a la solicitado por éste Órgano Garante misma que se analizará a través del siguiente cuadro comparativo:

<i>Solicitud de Información</i>	<i>Respuesta de la Entidad Pública</i>
<i>¿Qué medidas tiene para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio?</i>	<i>"... La Creación de la Unidad de atención a mujeres víctimas del delito, misma que abarca diversas aéreas en las que, se investigan delitos cometidos en contra de la mujeres, como lo son Violencia Familiar., delitos sexuales y Trata de Personas, así como Homicidio de Mujeres y Feminicidios., en las cuales se atiende de manera diligente todas y cada una de las necesidades jurídicas que tienen las mujeres..." (sic)</i>
<i>¿La efectividad en el cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al fortalecimiento de la Fiscalía General, a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como a la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos?</i>	<i>"... sí..."</i>
<i>¿La Unidad Especializada encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres a que se refiere la solicitud de AVGM, cómo está funcionando para elaborar los expedientes en la identificación de los casos?</i>	<i>"...Desde del inicio de la carpeta de investigación donde la víctima es mujer se realizan todas y cada una de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, esto con estricto apego con el <u>Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de Morelos</u>, asignándoles un número de carpeta, los cuales permiten la plena identificación de datos referenciales como lo es víctima, imputado y delito, a la par se va creando la base de datos lo cual permite un mejor control, mismo que abona a la realización de las actuaciones necesarias y pertinentes al momento procesal en el que se encuentra la carpeta, así como la aplicación de hojas de trabajo y los protocolos correspondientes." (sic)</i>

Como se puede observar del cuadro comparativo que antecede, la citada servidora pública, se pronunció respecto de la información de interés de la particular otorgando datos que guardan congruencia y relación con la misma, pues dicha funcionaria pública contesta de manera puntual a cada uno de los cuestionamiento formulados por *****; y al advertir que quien aquí se pronuncia es precisamente la Coordinadora de la Unidad de Atención de Mujeres Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado de Morelos, quien de acuerdo a lo que señala el artículo 27 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se encuentra facultada para conocer de la información materia del presente asunto, en ese sentido, se considera adecuada la respuesta proporcionada, precisando que todo servidor público es responsable de formular, producir, procesar, administrar, sistematizar, actualizar, archivar y resguardar información generada en el quehacer público es sujeto a responsabilidad en caso de no cumplir con las normas legales y reglamentarias

**Rufino Tamayo esquina Morelos,
 No. 13 Col. Acapatzingo, CP 62440
 Cuernavaca, Morelos, México**

**www.imipe.org.mx
 Tel. 01(777) 362 25 30**



ENTIDAD PÚBLICA: Fiscalía General del Estado de Morelos.
RECURRENTE: *****+
EXPEDIENTE: RI/032/2016-III
COMISIONADO PONENTE: Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez.

inherentes a sus funciones, por tal razón, la Maestra en Derecho Fabiola Jazmín García Betanzos, Coordinadora de la Unidad de Mujeres Víctimas del Delito del ente público aquí obligado, es responsable de las manifestaciones que emitió y en su caso de las consecuencias que pudiera traer.

Amén de lo anterior, este Instituto pone de relieve que el derecho de acceso a la información es una prerrogativa inherente a toda persona para acceder a documentos que se encuentran en posesión de las entidades públicas, esto es, la finalidad de este derecho es acceder a la información, creada, administrada en poder de los sujetos obligados, entendiéndose como documentos lo previsto por el artículo 6 numeral 7 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos (*oficios, acuerdos, correspondencia, directivas, circulares, minutas, expedientes, reportes, estudios, contratos, actas, convenios, resoluciones, instructivos, memorandos, notas, estadísticas, sondeos, encuestas, expresiones y representaciones materiales*).

En ese contexto, el cuerpo normativo aludido, en el capítulo tercero, "Del procedimiento de Acceso a la Información" específicamente el artículo 77, numeral 2, refiere:

"Artículo 77.- Cualquier persona podrá ejercer el derecho de acceso a la información ante la entidad pública que corresponda. Este derecho se activa con la presentación de una solicitud en escrito libre, en los formatos, sencillos que apruebe el Instituto vía electrónica o a través del sistema que éste establezca. La solicitud deberá contener, por lo menos:

- 1.- Nombre completo, domicilio u otro medio para recibir la información y notificaciones, como correo electrónico.*
- 2.- Descripción clara y precisa de los documentos e información que solicita.*
- 3.- Datos que faciliten la búsqueda y localización de la información, en su caso.*
- 4.- Modalidad en la que solicita recibir la información."*

Del precepto legal aludido se advierte como requisito indispensable al presentar una solicitud de información la descripción clara y precisa de los documentos e información que se solicita, hecho que en el caso en particular no se actualiza, toda vez que la aquí recurrente no precisó acceder a un documento, más bien desea obtener de la autoridad un pronunciamiento, obteniendo una respuesta positiva por parte de la entidad pública pues la Fiscalía General del Estado de Morelos se manifestó al respecto.

Así pues, es dable tener por cumplida la obligación de la entidad pública aquí obligada, toda vez que al pronunciarse sobre la información del interés del ahora recurrente, solventó la inconformidad de quien promueve -falta de respuesta-. Lo anterior, en términos de lo previsto por el artículo 89 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, que a la letra refiere lo siguiente:

"Artículo 89.- Las unidades de información pública de cada entidad sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. De no estar en sus archivos las unidades deberán justificar la ausencia o destrucción de la información solicitada. La obligación de acceso se cumplirá cuando el solicitante tenga a su disposición las copias simples, certificadas o cualquier otro soporte técnico en el que se encuentre contenida la información solicitada o cuando realice la consulta de la información en el lugar en el que esta se encuentre. Cuando la información solicitada ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al solicitante el lugar donde puede consultarla y las formas para reproducir o adquirir dicha información. Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito en el formato que le proporcione la unidad."

En relación a lo anterior, sirve de apoyo la Tesis Aislada número I.8o.A.136 A, identificada con número de registro 167607, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2887, Tomo XXIX, de marzo de 2009, materia Administrativa, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal expresa:

*"Novena Época
Registro: 16760
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tomo : XXIX, Marzo de 2009
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.8o.A.136
Página: 2887*

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL.

Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y

**Rufino Tamayo esquina Morelos,
No. 13 Col. Acapatzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México**

**www.imipe.org.mx
Tel. 01(777) 362 25 30**



ENTIDAD PÚBLICA: Fiscalía General del Estado de Morelos.
RECURRENTE: *****+
EXPEDIENTE: RI/032/2016-III
COMISIONADO PONENTE: Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez.

disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández."

No obstante lo expuesto, cabe mencionar que este Instituto es un ente de buena fe, pues su labor más importante es procurar el respeto al derecho de acceso a la información de la sociedad, no la de calificar la veracidad de los datos proporcionados, ya que tampoco cuenta con dicha facultad, lo que se ratifica con lo dispuesto en el Criterio 031/010, sostenido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) hoy (INAI), mismo que se aplica por analogía al presente y que a continuación se transcribe:

"Criterio 031/10

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permite al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.

Expedientes:

2440/07 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Lujambio Irazábal

0113/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - Alonso Lujambio Irazábal

1624/09 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos - María Marván Laborde

2395/09 Secretaría de Economía - María Marván Laborde

0837/10 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. - María Marván Laborde"

Así, queda claro que la Fiscalía General del Estado de Morelos, se pronunció sobre la información que le fue requerida por este Instituto, mediante acuerdo de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis; solventando así la inconformidad de la promovente.

En este sentido, la entidad pública modificó el acto objeto de inconformidad *-falta de respuesta-* al remitir pronunciamiento que guarda congruencia y relación con la información solicitada por *****+, motivo de ello, el presente recurso de inconformidad ha quedado sin materia; en consecuencia, es procedente decretar el sobreseimiento del presente asunto, con fundamento en los artículos 112, numeral 1, y 114, numeral 2 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos³, lo anterior considerando los siguientes aspectos:

a. Se cuenta con la información remitida por el Titular de la Unidad de Información Pública de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

b. Consecuencia de lo anterior, se modificó el acto impugnado por *****+ falta de *entrega-* y se concreta el cumplimiento por parte del sujeto aquí obligado, a su obligación de transparencia y acceso a la información pública, para el caso en concreto.

³ Artículo 112.- Las resoluciones del Pleno no excederán de treinta días hábiles contados a partir de la interposición del recurso de inconformidad, del que resolverá:

1. Sobreseerlo.

2. Confirmar el acto o resolución impugnada.

3. Revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnada.

Artículo 114.- Es causa de sobreseimiento del recurso de inconformidad:

1. El desistimiento por escrito de quien promueve el recurso de inconformidad.

2. Cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso.

3. El fallecimiento del inconforme.



ENTIDAD PÚBLICA: Fiscalía General del Estado de Morelos.
RECURRENTE: *****+
EXPEDIENTE: RI/032/2016-III
COMISIONADO PONENTE: Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez.

c. El acto objeto de inconformidad que ***** , se extinguirá al momento de que este Órgano Garate le proporcione, la respuesta remitida por el Titular de la Unidad de Información Pública de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Bajo ese contexto, se advierte que el presente asunto no puede correr otra suerte más que tenerse por debidamente concluido, una vez que se le haya proporcionado a ***** , la información remitida por parte del Titular de la Unidad de Información Pública de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con sus respectivos anexos.

Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 156/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 226, con el siguiente contenido:

"Registro No. 168489

Localización:

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE.

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2008-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 8 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González.

Tesis de jurisprudencia 156/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de octubre de dos mil ocho.

Ejecutorias

CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2008-SS.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto.

RESUELVE

PRIMERO. Por lo expuesto en los considerandos QUINTO y SEXTO, SE SOBREESE el presente recurso.

SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando SEXTO se instruye a la Dirección General Jurídica de este Instituto para proporcione a ***** , el oficio número FGE.DGSIC.1410.16-02, del uno de marzo del dos mil dieciséis, signado por el Licenciado Víctor Manuel Alanís Morales, Titular de la Unidad de Información Pública de la Fiscalía General del Estado de Morelos, así como sus respectivos anexos.

TERCERO.- Un vez que el estado de los autos lo permita, tórnese el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo correspondiente, como asunto totalmente concluido.

**Rufino Tamayo esquina Morelos,
No. 13 Col. Acapatzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México**

**www.imipe.org.mx
Tel. 01(777) 362 25 30**



ENTIDAD PÚBLICA: Fiscalía General del Estado de Morelos.
RECURRENTE: *****+
EXPEDIENTE: RI/032/2016-III
COMISIONADO PONENTE: Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez.

CÚMPLASE.

NOTIFÍQUESE por oficio al Titular de la Unidad de Información Pública de la Fiscalía General del Estado de Morelos y por escrito a la recurrente.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, Licenciada en Psicología Dora Ivonne Rosales Sotelo y Doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, siendo ponente el tercero en mención, ante el Secretario Ejecutivo, con quien actúan y da fe.

M. en D. MIREYA ARTEAGA DIRZO
COMISIONADA PRESIDENTA

LIC. DORA IVONNE ROSALES SOTELO
COMISIONADA

DR. VÍCTOR MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ
COMISIONADO

LIC. GUILLERMO ARIZMENDI GARCÍA
SECRETARIO EJECUTIVO

Reviso. Directora General Jurídica.- Lic. Cecilia García Arizmendi

ADECL

Rufino Tamayo esquina Morelos,
No. 13 Col. Acapatzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.imipe.org.mx
Tel. 01(777) 362 25 30

